

LA TRANSICION Y EL CAMBIO (1975-1993)

FERNANDO GARCIA DE CORTAZAR

Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Deusto

Después de Franco... ¿qué?

Cuando en noviembre de 1975 se dejaba por fin morir en paz a Franco ya se habían hecho perseverantes palabras como libertad, amnistía, autonomía y elecciones, que escribirían la historia de los años posteriores. Si muerto el dictador muchos creyeron haber "matado al padre" y con él sus "demonios familiares", pronto se darían cuenta de que la liberación de la vida privada y del comportamiento público exigiría aguantar la ortopedia de alguna clase de ordenanza, constitución o reglamento que pusiera banderillas al neófito del *desmadre* español. En cualquier parte del país, el poder político —fuera éste el que fuere— perdió siempre la carrera ante la iniciativa popular, que no se paró en barras ante la llamada "legalidad vigente". Las características políticas del franquismo y su excepcional duración influyeron no poco en las actitudes y apetencias exhibidas en la fase inaugural del régimen democrático destinado a sucederle. Cansados de tantos años de vivir en la diferencia, los españoles corrieron a practicar sus libertades individuales antes de que el cambio político les diera existencia jurídica. De acuerdo con las pautas culturales europeas, la sociedad civil estrena un estilo de vida ensayado en la clandestinidad de los últimos años franquistas, a la espera de su ratificación por la política venidera.

En su primer discurso como rey, Juan Carlos I dejaba entrever un espíritu nuevo: ninguna referencia a la guerra civil, ni al Movimiento. Sin embargo, el primer gobierno de la monarquía, con Arias Navarro al frente, podría haber sido muy bien un gabinete de Franco. El país emprendió el viraje cuando un desconocido burócrata franquista, Adolfo Suárez, dio el salto a la presidencia del ejecutivo. Ahora parece claro que Juan Carlos conocía bien a su personaje y que su nombramiento constituyó un

grandísimo acierto de la corona: él fue el verdadero artífice de la transición de una dictadura extenuada a una democracia entusiasta. Al cumplirse un año de la muerte del Caudillo, el joven presidente ya ha conseguido que las Cortes franquistas se hicieran el *harakiri* programando un sistema bicameral basado en el sufragio universal. El franquismo moría como un samurai, con la espada de su propia ley, y autorizaba la transición hacia la democracia.

Tres transiciones europeas —griega, portuguesa y española— casi coincidentes en su arranque suscitan el interés de los estudiosos. Habría similitud entre esos países en lo referente a la ausencia de una tradición de tolerancia y pluralismo y, por el contrario, en la proclividad de sus militares a intervenir en asuntos de gobierno. La peculiaridad de la transición en España habría que buscarla en la existencia de un sector mayoritario de ciudadanos, que no se sentía representado ni por el modelo continuista ni por la oposición institucionalizada. Otros factores que singularizan la transición española recuerdan el protagonismo del rey y la radicalidad de las reivindicaciones autonomistas.

Buena parte de los españoles deseaba un cambio sin riesgos, una reforma política que no hiciese peligrar su status socioeconómico; bien puede decirse que el consenso estaba en el ambiente aun antes de reflejarse en el papel. Los deseos de integrar a España en las economías europeas —vía Mercado Común— y la necesidad de mantener una sociedad dinámica y en expansión, en la que sostener un sistema político atrasado hubiera sido un suicidio, harían el resto. Por otro lado, la oposición democrática, inventora del sofisma de la "ruptura pactada", con su escaso arraigo, mala organización y permanente divergencia, estaba claro que no podía ser una alternativa al reformismo. Como en todos los cambios de régimen, un enjambre de oportunistas, granujas o simplemente pusilánimes, haciendo protestas de democracia, corrió a las oficinas de reciclaje político con ánimo de buscar una convalidación de anti-franquismo.

A medida que se avanzaba en la reforma o se daban pasos como la legalización de los partidos y sindicatos, el sistema adquiría un tono de mayor estabilidad y la superficie política y formal de la monarquía se desprendía de esa vigencia menor del franquismo para poder dar el salto a la plena homologación de una España democrática. Durante aquellas fechas de mudanza, la política se vivió sobre todo en la calle, sembrada de protestas obreras y revueltas

exigiendo la amnistía de los delitos de la dictadura. Los duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pusieron en aprietos, repetidas veces, la normalización democrática y urgieron al gobierno a erradicar los malos hábitos adquiridos por los cuerpos represivos en vida del dictador.

Desde la misma hora de la muerte de Franco, los ojos del país se vuelven a los militares, a los que no se sabe exactamente cómo tratar pero a los que es preciso llevar cuanto antes al redil de la democracia. Bastante anacrónico y nada liberal, al ejército se le mira con desconfianza temiendo que en cualquier oportunidad el camino hacia las libertades pudiera quedar interceptado de un sencillo *cuartelazo*. Con la idea de incorporar a los militares al nuevo sistema político, Adolfo Suárez improvisó una reforma del cuerpo en busca de su mayor profesionalidad y vinculación al rey. Ni ETA ni el GRAPO pondrían las cosas fáciles; sus atentados a altos oficiales consiguieron irritar al ejército y provocaron constante ruido de sables. En la primavera de 1977 la legalización del Partido Comunista pudo haber colmado el vaso de la ira militar de no mediar la habilidad de Suárez, que se apuntó uno de los grandes éxitos de su labor democratizadora. Como muestra de la preocupación gubernamental por "civilizar" a los militares, nació el Ministerio de Defensa, confiado enseguida a un civil, con el encargo de sujetar la milicia y extender en ella el espíritu democrático.

Más preparada para encajar el cambio, la Iglesia española se adelantó por medio de su jerarquía a saludar el proyecto de convivencia política, que compartirían los españoles. Ya no hay quema de conventos, ni matanza de frailes, como en anteriores jornadas de exaltación liberal, ni jamás la Iglesia había recorrido tanto camino en tan breve tiempo, desde su legitimación de la dictadura militar hasta su apoyo al programa de la democracia aprendida la lección de su fracaso en las filas del Movimiento. La Iglesia apoyó al sector reformista del franquismo, alentó a la oposición liberal y contribuyó, más que ninguna otra institución, al reblandecimiento de la agresividad de la derecha conservadora contra el nuevo régimen democrático. Por un momento la tentación nacionalcatólica pareció vencida pero enseguida surgiría bajo la forma de reclamación de los "derechos" de la Iglesia en el texto constitucional, la enseñanza, o la normativa del matrimonio; el pluralismo con su secularización incontenible sería de ahora en adelante la gran prueba de su lealtad democrática. Quedan muchos rasgos de un pueblo

de tradición y costumbres católicas, la sociedad española rezuma símbolos religiosos, sin embargo la Iglesia viene perdiendo de modo acelerado su antigua influencia como definidora del recto orden social. Con la sequía de nuevos candidatos, la edad media del clero se ha disparado espectacularmente manifestando la vejez de una institución que no consigue detener el desplome de la práctica religiosa: en 1990 sólo el 27 por 100 de la población española se considera católica practicante.

Después de más de cuarenta años de ayuno electoral obligatorio, los españoles eligieron en junio de 1977 a sus representantes en las Cortes. La coalición UCD, formada por diversos partidos de centro, socialdemócratas y liberales en torno a Adolfo Suárez, obtiene el triunfo seguida del PSOE, encabezado por Felipe González. Rozando la mayoría absoluta, UCD revalida su poder, pero queda a merced de sucesivos acuerdos que darán un tono consensuado a los años de la transición. De la avalancha de agrupaciones políticas nacidas con el entusiasmo del cambio, surgía un bipartidismo imperfecto, característico del actual sistema de partidos en España: dos grandes formaciones parlamentarias de centro derecha y centro izquierda, flanqueadas por la derecha conservadora, animada por Manuel Fraga, y la izquierda eurocomunista de Santiago Carrillo. Asimismo la consulta electoral mostró otra realidad política vinculada en el franquismo a la reivindicación democrática: la existencia de una conciencia nacionalista en el País Vasco y Cataluña, donde los democristianos PNV y CIU alcanzaban una representación parlamentaria importante.

La aldea constitucional

Al margen de acontecimientos concretos, el proceso histórico de la transición discurrió bajo la guía fundamental de dos ejes; la construcción de un Estado descentralizado, que reconociera una sustancial independencia administrativa y de gobierno a las regiones, y la búsqueda de un consenso entre las distintas fuerzas político-sociales que sirviera para dotar al régimen de una Constitución ampliamente participada. Algunos partidos, que durante el franquismo habían mantenido una animosa oposición al sistema socioeconómico, perderían sus principales señas de identidad y serían absorbidos por la misma magnitud de la reforma política. Fue el precio pagado por algunos, como el PC, para responder a la pregunta lanzada por Carrillo desde el túnel del tiempo. El "después de Franco... ¿qué?" quedaba resuelto tras los

pactos y la Constitución. Después de Franco... el Estado.

En los años postreros del franquismo, la prosperidad económica había servido para que los grupos sociales menos favorecidos tuvieran una compensación a su falta de libertad, mediante el disfrute de un mejor nivel de vida y la integración en la sociedad de consumo. No se realizó una mejor o más justa distribución de la riqueza, pero lo cierto es que ésta aumentó de tal forma que, casi por inercia, el capitalismo trató de extender el disfrute del botín. Por el contrario, la transición a la democracia coincidirá con la llegada a España de los efectos de la crisis económica mundial de los setenta. Una depresión que presentaba todos los elementos formales de los ciclos negativos del sistema: recesión de mercados, amontonamiento de "stocks", cierre de fábricas, pérdida de empleo... Y también algunos elementos nuevos, inesperados y heterodoxos respecto de quiebras anteriores, el peor de los cuales fue el encarecimiento súbito y desmesurado del precio del petróleo y otras materias primas, sobre cuya obtención a bajo precio descansaban las economías de los países desarrollados. Junto al consecuente aumento de los costos de producción, una inflación desorbitada, favorecida por la escalada del déficit del Estado, se convertía en la amenaza cotidiana de empresas, patronos y trabajadores. En 1977 la inflación alcanza el nivel tercermundista del 25 por 100, algo desconocido en la historia económica del país desde la postguerra y que sobrepasa notablemente las tasas de todos los países industrializados. Ante este cúmulo de negras coincidencias, muchos recordaron con inquietud las circunstancias adversas en las que había naufragado la República. Sin embargo, la democracia europea de las letras confía en el experimento español y le da su aval y espaldarazo concediendo en 1977 el Nobel al poeta Vicente Aleixandre, por su vela de armas a contracorriente de la nadería cultural del franquismo.

Al agravarse las condiciones económicas, los enfrentamientos sociales por la obtención de rentas se recrudecieron, alcanzando límites alarmantes. Los primeros años de la transición resultaron cruciales para fijar los contenidos de una estrategia de contención social. La economía empresarial estaba bajo mínimos mientras el paro empezaba su danza macabra; algo soportable todavía, pero anunciador de un período incierto y mucho más dramático. Ocupadas en atender las urgencias políticas, las autoridades no ofrecieron demasiadas alternativas y sus recomendaciones se inclinaron

por una fórmula de reparto de la crisis. De su diagnóstico saldrían, sin embargo, los principales elementos aplicados en la política de acuerdos sociales, realizados a tres bandas —gobierno, empresarios y partidos sindicatos—, cuya primera piedra la pusieron el gabinete y los partidos políticos, cuando en 1977 firmaron los pactos de la Moncloa, precedidos de la devaluación de la peseta. El objetivo más importante de esta política de acuerdos fue la convalidación, por los sindicatos y los partidos socialista y comunista, del modelo económico y social establecido enseguida en los principios constitucionales. Para acomodar el sistema económico a los principios de una economía de mercado, el gobierno proyectaría la reforma fiscal, la de la Seguridad Social y la empresa pública.

En el decenio de los ochenta, los pactos de la Moncloa generaron un clima de paz social, que se tradujo en descenso de la conflictividad y encauzamiento de las reivindicaciones laborales. Aparcando sus convicciones ideológicas, la clase obrera, gracias a ellos, aceptó el sistema socioeconómico definido en la Constitución. Después, la legitimación electoral ha prestado a los gobiernos una capacidad de maniobra en política económica prácticamente ilimitada, según la cual se ha intentado salir de la crisis con altos índices de desempleo subvencionado, con benevolencia fiscal y de cierre empresarial y, sobre todo, con la contención del valor añadido del trabajo en el precio final.

Fruto del consenso de las principales fuerzas parlamentarias, la *carta magna* de 1978 entraba en la historia de España como la primera constitución pactada y no impuesta al país por el grupo dominante. La izquierda española tenía una honda tradición republicana, pero ahora con sentido pragmático reconocía en la fórmula monárquica la mejor solución para el Estado, surgido de las cenizas de Franco. De esta manera, el déficit de legitimidad democrática que soportaba el rey Juan Carlos se liquidaba con el refrendo mayoritario de la Constitución. Más liberal que muchas de las de su entorno europeo, la Constitución de 1978 pretendió, asimismo, restituir el poder a las regiones atendiendo a la reivindicación histórica de autonomía representada desde el siglo pasado por los nacionalistas catalanes y vascos. En los primeros días del postfranquismo el impulso anticentralista se manifestó tan poderosamente que obligó a los políticos a plantearse como tarea inaplazable la reforma administrativa y territorial del país. No sólo las "nacionalidades históricas" reconocidas por la República —Cataluña, País Vasco y Galicia— podrían

tener gobierno propio, sino también todas las regiones que lo solicitaran de acuerdo con el procedimiento constitucional.

A pesar de ser la primera que reconocía las reivindicaciones históricas vascas, la Constitución de 1978 no consiguió más que una respuesta abstencionista del PNV. La afirmación constitucional de la indivisibilidad de la soberanía española, que trató de ser esquivada por los peneuvistas con una cláusula, determinó la abstención de los hijos de Arana. Por mucho que esperaran ansiosos a la aprobación del texto para sacar adelante su soñado Estatuto, los nacionalistas vascos prefirieron seguir jugando, como sus antepasados los carlistas, a no ser constitucionalmente españoles. En los nacionalismos, los símbolos tienen más importancia que las realidades, y el del rechazo constitucional no debía desaprovecharse. Mientras el PNV discutía de soberanía, ETA hacía el trabajo sucio, llegándose a pensar que sólo un acercamiento del gobierno a las posturas nacionalistas la detendría. El año de la aprobación del texto constitucional los etarras matan a 65 personas, muchas más que durante todo el régimen de Franco. Si el nacionalismo vasco más que una ideología es una conciencia social, ETA, que brotó de él, nació también de su conciencia, asumiéndola en vez de combatirla. Por ello cualquier nacionalista vasco podrá condenar los métodos de ETA, pero lo que nunca podrá hacer sin traicionarse es rechazar el propósito final de la organización: la independencia de Euzkadi. En el resbaladizo terreno de los fines y medios, con Maquiavelo al fondo, se ha movido largo tiempo el nacionalismo vasco tradicional, acompasando sus apoyos y condenas a ETA, al ritmo de transferencias de poder e intereses en una historia de amor y desamor que llega hasta hoy. Por el contrario, las relaciones del gobierno con Cataluña fueron más fáciles, al encontrar Suárez un interlocutor ideal en Tarradellas, símbolo de la Generalitat en el exilio, al que enseguida acomodó en Barcelona, a modo de muestra del reconocimiento oficial de la singularidad catalana.

Como el sentimiento autonomista casi se reducía a Cataluña y el País Vasco, la clase política puso su empeño en fomentar una conciencia regional que sirviera de fundamento a la generalización del sistema autonómico. A impulsos miméticos de catalanes y vascos se descubrieron derechos históricos o inventaron identidades en un tortuoso y vacilante proceso cerrado en 1983 con el diseño de una España de 17 comunidades autónomas, todas ellas reguladas por sus estatutos de autonomía y

regidas por sus propios gobiernos y parlamentos, dotados de distintas atribuciones. Un nuevo Ministerio de Administración Territorial se encargaría, a partir de las elecciones de 1979, de supervisar la transferencia del poder a las regiones. Pasada la primera efervescencia, la fiebre autonómica disminuyó, dejando ver en toda su crudeza las contrapartidas negativas de una división, en gran parte artificial, donde prevalecieron los argumentos históricos sobre los económicos o geográficos y que ha hecho aumentar la burocracia y el gasto público.

Una vez ratificada la Constitución, el gobierno convocó elecciones que arrojaron resultados casi idénticos a los de la consulta precedente. Antes de que su estrella comience a apagarse, tiene tiempo Suárez de llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos respecto de su Estatuto. Jamás texto legal alguno había ido tan lejos en el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la comunidad vasca. Ese verano de 1979 fue uno de los momentos de mayor euforia de la transición, que enseguida ETA se encargó de aguar demostrando su propósito de sostener la lucha armada hasta alcanzar la independencia de Euzkadi. A Suárez, sin embargo, se le echaría en cara el no haber aprovechado el entusiasmo vasquista para contener el nacionalismo, supeditando el compromiso estatutario a la aceptación pública por los peneuvistas de la unidad de España, así como a la manifestación de su voluntad de colaborar con el gobierno central en la lucha contra ETA.

Toda la unanimidad lograda por Adolfo Suárez en torno a las grandes cuestiones de la sustitución del régimen se deshizo cuando llegó el trance de llevar el cambio democrático a la vida cotidiana de los españoles. Sin mayoría parlamentaria y con los principales ayuntamientos en manos de la izquierda, el gobierno de UCD hubo de enfrentarse no sólo a la reforma del Estado y sus aparatos, sino también al desarrollo constitucional en aspectos tan espinosos como el divorcio, la enseñanza o el empleo. No era UCD, mezcla de ideologías y personalismos, la mejor plataforma para preparar un programa integral de reformas y enseguida pudieron verse divergencias de criterio y funcionamiento acompañando a la tarea legislativa. Ninguna ayuda cabía esperar del PSOE, empeñado en desgastar al gobierno y en ofrecer, por el contrario, una imagen de unidad, reforzada desde su abandono del marxismo, como rasgo definitorio. Acosado por el sector democristiano de su partido, Suárez, más en onda con la socialdemocracia, prefirió tirar la toalla y ceder el mando a Leopoldo Calvo

Sotelo, ingeniero ilustrado, desprovisto por completo del magnetismo personal del dimisionario.

Conforme la reforma política encuentra un rumbo menos vacilante, los partidos esgrimen ante ETA el considerable aval de sus votos y construyen día a día la certeza de encontrarse en un sistema democrático, pleno de legitimidad y abierto a la discrepancia. La respuesta terrorista ante esta situación de acorralamiento fue tratar de forzar la credibilidad y los límites de la reforma, provocando cada vez con mayor brutalidad al aparato militar y policial del Estado, a la espera de un "derechazo" desestabilizador de los más reaccionarios o, en su defecto, de una aceptable negociación. El mantenimiento de la cadena de atentados a los que se une en Guernica el rechazo al rey por los nacionalistas radicales de HB y las protestas por la muerte de un etarra en una dependencia policial culminarán, en efecto, en una intentona involucionista el 23 de febrero de 1981, con el Congreso de los Diputados ocupado por un pelotón de guardias civiles. Si bien no llegaron los golpistas a sustituir ni mucho menos el sistema democrático, como era su intención, suscitaron recelos contra la política autonómica en sectores del gobierno y los partidos de ámbito estatal; el complejo de *democracia vigilada* se volcó entonces en retardar las transferencias estatutarias. Explotando estos retrasos, otra vez el nacionalismo vasco encontraba motivos de disgusto e incompreensión en su pulso con *Madrid* mientras ETA recibía un balón de oxígeno que le permitía mantener vivo su desgastado discurso detractor de la democracia española.

Entre el golpe y la llegada de los socialistas al poder, la UCD consuma su suicidio político, incapaz de encontrar el equilibrio centrista en cuestiones como la universidad o las televisiones privadas, después de que la aprobación de una ley de divorcio provocara la primera indisciplina parlamentaria. Cada vez que, con el propósito de apaciguar a una facción rebelde, Calvo Sotelo concretaba el programa del partido, orientándolo a la izquierda o la derecha, invariablemente causaba fisuras en otra camarilla; de tal forma que cuando llamó a los españoles a votar, la UCD había perdido la tercera parte de sus diputados en el Congreso. En medio de la desbandada, el partido centrista logró estrechar filas para meter a España en la OTAN, objetivo concebido en la era de Franco, pero inalcanzable hasta entonces por la resistencia de los miembros de la alianza. La impopularidad de la medida socaba aún más la imagen de UCD en la opinión pública que, entregada al PSOE, redobla sus

mensajes en solicitud de un cambio de política. Calvo Sotelo le hizo caso no agotando la legislatura y anticipando las elecciones a octubre de 1982.

Demócratas arrogantes

Consumada su ruptura con Marx, el PSOE se prepara a la toma del poder mediante la búsqueda de una mayoría electoral suficiente para gobernar en solitario. No se trataba, pues, de representar a una sola clase o estrato social sino de pelear por la conquista del ámbito mayoritario, que en las sociedades desarrolladas coincide con el centro político. La frivolidad regionalista, el radicalismo, la retórica obrerista y hasta el antiamericanismo podían servir, como lo hicieron, en su labor de derribo de Suárez, pero resultaban perjudiciales para ganar la mayoría absoluta en una elección. Por el contrario, la consigna socialista de *cambio y modernización*, percibida como oferta de políticos jóvenes no contaminados por el franquismo y promesa de un nivel europeo en servicios públicos y renta, conectaba fácilmente con las aspiraciones del conjunto de la sociedad española. Si a esto le añadimos la historia de "honradez" socialista, su compromiso de crear 800.000 empleos netos y el tirón del líder, se entenderá enseguida la magnitud de la victoria de Felipe González. Nunca en España partido político alguno había conseguido tan abultado triunfo. Cerca del 49 por 100 del censo votó a este PSOE moderado y centrista, que se hacía con una muy holgada mayoría absoluta. Frente a los ganadores, y a costa de la hecatombe de UCD, Manuel Fraga, a la cabeza de Alianza Popular, obtenía un premio a la perseverancia, convirtiéndose en el gran patrón de la derecha española reciclada. El PCE, víctima de sus repetidas tormentas domésticas, tocaba fondo y los nacionalismos de distinto signo sólo sumaban votos en Cataluña y el País Vasco.

Tras algunos titubeos, el PSOE afronta la impopularidad de una política de rigor presupuestario y reajuste económico, que impone la inmediata devaluación de la peseta y el empleo del bisturí en el sector industrial público, creado por Franco. Esta labor de cirugía, llamada eufemísticamente *reconversión*, exigió el cierre de numerosas empresas, sobre todo en el ámbito de la siderurgia, la construcción naval y los electrodomésticos, aparte de reducciones drásticas de plantillas. Aplazada por los gobiernos anteriores, la reconversión fue, pues, violenta y socialmente muy lesiva para los socialistas, convertidos ahora en verdugos de sus clientelas

obreras. Salvo la red eléctrica de alta tensión, el PSOE no efectuó nacionalización alguna y a partir de su segundo mandato de 1986 empezó a privatizar sociedades públicas constituidas en los años de la dictadura. Si el Estado se hizo cargo, por vía de urgencia, de Rumasa, inmenso *holding* implicado en acciones fraudulentas, fue para enseguida ponerlo, a trozos, en manos privadas.

Como consecuencia del escaso crecimiento de la economía, el empleo continuó cayendo durante el primer cuatrienio socialista. El PSOE, que había heredado una tasa de paro del 16 por 100 de la población activa, la sube al 20 por 100 en 1984 para tocar fondo, con un 22 por 100, al año siguiente. Ningún otro país de la OCDE puede exhibir un récord tan negativo, reflejo del carácter estructural del problema del empleo en España. Más tarde, cuando la economía mejoró y se fomentó la contratación temporal, el empleo creció con mayor ritmo que en la Europa industrializada. En enero de 1986 España, miembro de pleno derecho de la CEE, recobraba la condición europea que le había sido negada durante los dos últimos siglos. Por otro lado, la perspectiva de eliminación de los aranceles con las demás economías comunitarias en un plazo de siete años enterraba la vieja querrela del proteccionismo y colocaba a la economía española en un mercado ampliado. En ese marco de convergencia, España debió cambiar su política permisiva con la inflación y el fácil recurso a la devaluación de la moneda como forma de combatir las vacilaciones externas de su economía. La estabilidad de la peseta, reforzada con su ingreso en el Sistema Monetario Europeo, y los elevados tipos de interés volcaron sobre España una torrencera de dinero que en 1992 le situaba en el tercer puesto del ranking mundial de reservas de divisas.

Desde la hora en que Europa aceptó a España en su exclusivo club, el capital extranjero hinchó la economía, fomentó altas tasas de crecimiento y dio pie al triunfalismo del discurso oficial con el milagro español de sintonía. Intentando aliviar la situación límite del paro, algo modificada por una importante economía sumergida, la política socialista puso el énfasis en la lucha contra la inflación, para lo cual contó con la inestimable ayuda del descenso en los precios del crudo, la caída de la divisa norteamericana y la mejora sustancial de los mercados internacionales. Pero han sido la política salarial y la reducción de plantillas las que han influido de forma más espectacular en el alivio de la economía empresarial, con mayor notoriedad a partir de 1985. Durante distintos ejercicios, la pérdida en varios

puntos del salario real amenazó gravemente la situación socioeconómica de los trabajadores, haciendo cundir la alarma entre los mismos sindicatos que habían propiciado la moderación salarial con los pactos. También en el terreno económico, Europa sirve de pretexto a los socialistas para practicar la política neoliberal que siempre desearon aplicar. Al recelo y animosidad de los obreros más radicales se unen a partir de 1987 abundantes críticas de UGT y COO a los ministros económicos del PSOE a los que acusan de favorecer la recuperación del sistema pagando un elevadísimo costo social y sin que se cumplan las contrapartidas prometidas con respecto a la inversión o a la creación de empleo. Al año siguiente, el gobierno socialista alcanza una difícil plusmarca al soportar una huelga general, lanzada por su propio sindicato aliado a Comisiones Obreras, que paraliza el país, pero que no impide, unos meses más tarde, su tercera mayoría consecutiva en las elecciones.

A fines de 1990 comenzó a advertirse con claridad que los aires de bonanza se alejaban y que la economía española se internaba en una senda espinosa de recesión. El vaticinio nacional acertó al predecir el estallido de la crisis y datarlo en la resaca del 92, cuando desvanecido el espejismo de la Exposición Universal de Sevilla y la Olimpiada barcelonesa el país hizo las cuentas. Un año más tarde, nada queda de aquella euforia y los tres millones de parados son el contrapunto trágico de la ilusión europea. En la raíz del infortunio económico de España se encuentran los Estados Unidos, cuya recesión ha afectado a la capacidad adquisitiva de los americanos y a los negocios de Europa. Por otro lado, los requisitos estipulados en Maastricht para la convergencia europea añaden dosis suplementarias de ajuste y recesión a las economías, sobre todo a la española; a las que se suma la férrea política monetaria impuesta por el Banco Central alemán, árbitro implacable de la economía del Mercado Común.

Con su perseverante protagonismo en la historia de España, la crisis del sector agrario manifiesta el envejecimiento de la población ocupada y la errática gestión de los socialistas que, al negociar el ingreso en la CE, prefirieron sacrificar el campo a cambio de un trato favorable en otras materias. Casi un millón de personas han abandonado el agro, donde la productividad de la mano de obra es muy baja y la descapitalización extremadamente alta. El campo español agoniza al tiempo que las industrias alimentarias caen en manos extranjeras y el propio gobierno, sin imaginación, ofrece dinero a los agricultores

para que tiren la toalla. Es el último capítulo del desarraigo campesino sobre el que cabalgó el "milagro económico" y que ha hecho de España una nación de ciudades desperdigadas en medio de grandes despoblados.

Bajo la égida socialista, la cultura especulativa y financiera se ha impuesto a la empresarial, haciendo nacer una generación de hombres de negocios, vinculada a operaciones mercantiles rápidas en las que se consiguen plusvalías impresionantes. Sacados a hombros en los ruedos de la prensa, los especuladores y logreros son los *nuevos ricos* de la sociedad española del fin de siglo, cuya banca se enorgullece de tener los beneficios más altos de Europa. El éxito económico se apoya ahora no en el mantenimiento de un proyecto productivo, sino en el manejo de información privilegiada y en una buena red de conexiones con el poder, a costa muchas veces del sacrificio de principios éticos. Al grito de "y tú más", los políticos de todo color dan trabajo a los jueces, dejando boquiabiertos a los ciudadanos cuando destapan la olla de la corrupción pública en un espectáculo compartido por otras democracias europeas. En 1991 el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, tuvo que presentar su dimisión, salpicado por un escándalo familiar de tráfico de influencias. Este olor a podrido y a dinero sucio amenaza gravemente la imagen de los políticos profesionales y fundamenta la percepción negativa que la inmensa mayoría de los españoles de los años noventa tiene de la función política. Pero, sobre todo, tizna al partido socialista que denunciado por corrupción toca fondo en su desprestigio electoral cuando en la primavera de 1993 decide adelantar los comicios. Por cuarta vez consecutiva el PSOE gana las elecciones, pero el 6-J los ciudadanos españoles ya no le obsequian con la mayoría absoluta.

A los partidos políticos, los dedos se les hacen huéspedes y acaban fiándose sólo de sus clientes, amigos y portadores de carnet: uno de cada 3,8 afiliados del PSOE desempeñaba un cargo público en 1984. La *empleomanía* surge con fuerza, emparentando la democracia vigente con otra más deshonesta, la de la España de la Restauración en la que nadie se rasgaba las vestiduras porque un ministro convirtiera a su barbero en bibliotecario de El Escorial. Mientras los gobernantes socialistas reparten patentes de *progresismo* y declaran abolidos los privilegios, la sociedad observa cómo el Estado —las autonomías también lo son— se convierte con demasiada frecuencia en un asunto de familia. A este precio no pueden los españoles lamentar la débil implantación

de los partidos políticos, que normalmente se considera uno de los graves problemas del sistema actual. España está a la cola de Europa en la proporción militante/voto: sólo uno de cada 55 españoles con derecho a voto milita en partidos políticos parlamentarios y son los nacionalistas los que más afiliados reclutan. Con los sindicatos, sucede tres cuartos de lo mismo.

Durante diez años largos, la contundencia legal de la mayoría absoluta permite al PSOE no sólo gobernar, sino también responsabilizarse de la gestión total del país. Ultimado el proyecto democratizador, en el que habían colaborado los herederos del franquismo con sus proscritos, los gobiernos socialistas ponen manos a la obra de la modernización de España, que en su programa equivalía a parecerse a Europa; si con los gobiernos de UCD España había dejado de ser *diferente*, se trataba en adelante de hacerla *parecida*. A finales del siglo pasado, Joaquín Costa también pensaba que la *euro-peización* permitiría al país encontrar el camino del bienestar social y la mejora de la calidad de vida. A pesar de su retórica amargura por el lastre de la herencia recibida, los socialistas pudieron emplear muchos de los cauces preparados por los anteriores equipos centristas. El principal de todos ellos fue la reforma fiscal que desde 1977 pretendía suministrar al Estado el dinero necesario para afrontar la extensión y mejora de los servicios públicos. Con el objeto de hacer respetar la legislación y perseguir el fraude, el gobierno desató una cruzada fiscal, mezcla de persuasión y amenaza, que en el quinquenio 1983-88 permitió descubrir dos millones de nuevos contribuyentes. Aunque la presión fiscal global es moderada y no alcanza la cota europea, se le hace pesada al español medio, que sufre en su salario la condescendencia del Estado con el gran capital y las pingües rentas. Y el desembolso resulta aún más enojoso si se lo relaciona con los deficientes servicios públicos o se compara éstos con los habituales en otros países de Europa.

Los recursos del Estado son ahora mayores que nunca, lo que explica la continua ampliación del sector público, alargado constitucionalmente a través de diecisiete administraciones autonómicas. A expensas del sector privado, el PSOE ha ensanchado la participación estatal en ámbitos como la enseñanza o la medicina, pero todavía se resiente la calidad de los servicios. La Seguridad Social acoge hoy a seis millones más de beneficiarios, sin embargo las prestaciones sanitarias mantienen su bajo nivel de aceptación y provocan numerosas críticas.

Asimismo, la escolarización obligatoria se ha prolongado, sin que haya traído una mejora definitiva de las condiciones materiales de la enseñanza pública. Mayor disgusto produce la incapacidad del gobierno de ofrecer una vivienda de bajo costo a los españoles, que aguantan indefensos la subida disparatada de los inmuebles.

A lo largo del calendario socialista, las relaciones de la Iglesia con el gobierno se han ido degradando hasta llegar a situaciones de incomunicación, con intercambio de dicitos y reparto de responsabilidades. En el deterioro de la convivencia ha influido no sólo el proyecto laicizador del PSOE, sino el distinto talante de las autoridades eclesiásticas comprometidas en el "catolicismo de asalto", diseñado por la cúpula vaticana desde el comienzo de los ochenta. El tratamiento de los temas religiosos por los medios de comunicación del Estado, la despenalización, en ciertos casos, del aborto y el repertorio legislativo de la enseñanza no universitaria han desencadenado verdaderas batallas entre ambas potestades. De ámbito regional, algunas, a raíz de determinadas exhortaciones pastorales de la jerarquía vasca sobre el autogobierno o ETA. Con todo, no hay unanimidad dentro de la Iglesia en cuál deba ser la respuesta apropiada al gobierno, en su grado de beligerancia o en el cálculo de los riesgos de una presumible manipulación de su estrategia con objetivos electorales por los partidos conservadores. Por otro lado, los fieles españoles no tienen la costumbre de financiar la Iglesia, lo que obliga a ésta a depender del presupuesto gubernamental y a buscar, en consecuencia, algún arreglo con el poder.

En los años ochenta los atentados mortales de ETA descienden de forma notable respecto al cuatrienio 1978-81 y se comienzan a considerar apoyos concretos para forzar la salida negociada, quedando atrás la contingencia de una eventual involución política o la más quimérica posibilidad de *derrotar al ejército*. Desde su llegada al gobierno, el PSOE ha mantenido todas las alternativas. De un lado ha establecido contactos con ETA, muchas veces negados en público, cuando no aireados como las *conversaciones de Argel*; de otro ha sofisticado y discriminado la acción policial contando, a partir de 1986, con el concurso de las autoridades francesas, que seis años más tarde le ofrece en bandeja la detención en Bidart del *presidium* etarra. En su deseo de ganar la partida a ETA, el gobierno socialista trata de crear fisuras en la organización mediante el ofrecimiento de la reinserción social a algunos de sus miembros.

Con esta política abandonan la cárcel decenas de etarras, sembrando intranquilidad en su dirección, que, como medida preventiva, asesina a una antigua dirigente reinsertada. El *síndrome de Yoyes* convence a más de un etarra a rehusar la reinsertación, por lo que el gobierno decide dispersar a estos presos entre las cárceles españolas para intentar evitar la coacción ejercida en los colectivos amplios por los duros de la banda. Pese a que ETA mantiene su repique de muerte y extorsión, los socialistas pueden apuntarse en su haber importantes éxitos en la lucha antiterrorista de tal forma que no pocos españoles aventuran el pronto fin de la pesadilla terrorista.

España se ha transformado considerablemente en los dieciocho años posteriores a la muerte de Franco, pero, en algunos ámbitos, los proyectos de cambio económico y político se han empantanado. Aunque el poder del pueblo sea sólo una mueca de la realidad dictada por un partido y la abstención amenace el modelo democrático, la sociedad civil sigue sin sacudirse a la política y se deja engullir por la voraz

burocracia. Mezcla de chapuza y modernidad, la España que divisa el siglo XXI convive con múltiples arcaísmos, herederos de una historia repleta de elementos retardatarios. En pleno proceso degenerativo de desideologización, la democracia socialista ha echado por la borda la gran esperanza liberal y se ha quedado, a sus anchas, con el lastre del autoritarismo y la didáctica paternalista del poder incontestado. No ha habido ni un solo gesto significativo del *felipismo* —ingreso en la OTAN, guerra del Golfo, peleas con los sindicatos— que no apuntara al aniquilamiento de una cultura política de izquierda. En la pira del autoderrotado socialismo real, los últimos gobiernos españoles han hecho arder no sólo los valores de la revolución de Octubre, sino también algunos de la francesa. Porque en el camino de las libertades personales también han aparecido obstáculos, bajo capa de eficacia policial en la defensa de la seguridad ciudadana o en la lucha contra el fraude tributario y el narcotráfico mientras la amenaza informática se cierne sobre la intimidad de los ciudadanos.



*Guardia civil en uniforme de servicio de invierno. Año 1990. Fotografía: Urdiales.
Fuente: Libro La Guardia Civil Española*